

Revista Enfoques
Universidad Central de Chile
enfoques@ucentral.cl
ISSN (Versión impresa): 0718-0241
CHILE

2005
Andrés Benavente Urbina
POPULISMO RADICAL Y FRAGILIDAD DEMOCRÁTICA
Revista Enfoques, número 004
Universidad Central de Chile
Santiago, Chile
pp. 59-72

Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal

Universidad Autónoma del Estado de México

<http://redalyc.uaemex.mx>



Populismo radical y fragilidad democrática

Andrés Benavente Urbina*

Resumen

El Populismo Radical –también llamado populismo revolucionario– es planteado por el autor como una amenaza a la democracia en América Latina, en cuanto instrumentaliza problemas económicos y sociales reales para confrontarse con el sistema institucional. En la primera parte del artículo aborda el plano conceptual, proponiéndose una caracterización tanto para el populismo clásico como para el populismo radical. En la segunda, se hace un estudio de los dos casos en que, durante el año 2005, las movilizaciones sociales, que a su vez eran expresiones del populismo revolucionario, provocaron agudas crisis de gobernabilidad en Bolivia y Ecuador, precipitando cambios de gobierno en dichos países. La tercera parte, a manera de conclusión, vincula a las expresiones del populismo radical o revolucionario con la fragilidad de las democracias de la región latinoamericana, y por lo mismo, compartiendo las premisas de la Secretaria de Estado norteamericana Condoleza Rice, el autor sostiene la necesidad de proteger la democracia con mecanismos efectivos y no meramente declamativos, dado que llama la atención la omisión de la comunidad internacional ante las movilizaciones sociales violentas y rupturistas que atentan en contra del ordenamiento institucional democrático, como ha ocurrido doblemente en Bolivia, argumentando que no se ha producido un quiebre de la Constitución en cuanto funcionan los mecanismos sucesorios regulares. La democracia no es sólo la apelación formal a tales mecanismos, sino el cabal respeto al Estado de Derecho y la efectiva vigencia de las libertades personales.

* Analista Político, Investigador del Instituto de Estudios y Gestión Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Central. Director del área Análisis del entorno Empresarial Latinoamericano y profesor de Riesgo Político del M.B.A. de la Escuela de Postgrado de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad Diego Portales.

1. En torno a lo clásico del Populismo

En los últimos años el populismo ha vuelto a cobrar protagonismo en América Latina. Se expresa tanto en manifestaciones de gobierno, al estilo tradicional, como acontece en la Venezuela de Hugo Chávez; como también a través de expresiones que provienen de movilizaciones contestatarias de sectores de la población en las cuales hay un populismo latente que se plasmaría en medidas concretas si los actores que las protagonizan alcanzan el gobierno. Es el caso de las movilizaciones de los piqueteros en Argentina; de los cocaleros en Bolivia, de la Conaie en Ecuador, etc.

Cuando se habla de populismo se está ante un concepto ambiguo que puede ser muy amplio e inclusivo según sea el rasgo que se enfatice. Así desde una perspectiva que considera el manejo de la economía de un país, se tiene que el populismo enfatiza el crecimiento a través de políticas distributivas en el corto plazo, a fin de incrementar el consumo; descuidando los equilibrios macroeconómicos, en especial lo relativo a la inflación y el déficit fiscal.

En algunas experiencias donde no es posible señalar que hubo o hay un régimen populista clásico, hay medidas populistas como aquellas que buscan satisfacer demandas puntuales de las personas. Hay una suerte de microeconomía distributiva que puede compatibilizarse con una macroeconomía más o menos equilibrada (Menem, Fujimori).

Los rasgos más relevantes del populismo, en sus diversas expresiones, son, entre otros:

En primer lugar, la existencia de un discurso anti-político, donde el rechazo a la política aparece como uno de los ejes de la convocatoria que cae en un terreno fértil en aquellas sociedades donde los partidos y el ejercicio de la actividad política es mal evaluada por la población. Chávez y Fujimori llegan al poder en sus respectivos países tras un profundo desencanto social hacia los políticos, a los cuales se les acusa de ineptitud y corrupción. De otra parte la movilización piquetera a la caída de De la Rúa se hacía bajo la consigna "que se vayan todos".

En segundo lugar, el populismo actual tiene un claro estilo mediático de comunicación política. Se prescinde de las instancias regulares de mediación, muchas de las cuales son percibidas como ineficientes, para establecer una suerte de diálogo directo entre la conducción y la base. Al estar en el gobierno, este estilo resulta más evidente por la disponibilidad de recursos y la fácil llegada a los medios. Desde fuera del gobierno, la visibilidad que los medios —en especial la televisión— dan a las demandas populistas o los planteamientos antisistémicos de sus voceros incrementan notablemente el

potencial de fuerza de estos actores. La incidencia de los medios en el aumento del peso político de Evo Morales en Bolivia y de las marchas cocaleras son al respecto un buen punto de referencia.

En tercer lugar, hay una fuerte voluntad movilizadora. Importantes sectores de la población son convocados para dar respaldo social al discurso y a la acción populista. Cuando se está en el gobierno, el uso discrecional de recursos públicos —con la consiguiente despreocupación macroeconómica— tiene como repercusión el apoyo de grupos sociales que visibilizan en las calles su adhesión al caudillo, como ocurrió con las masas peronistas en el pasado y como acontece hoy con las permanentes movilizaciones chavistas. A su vez, el populismo radical recurre a la movilización —y dentro de ella a la violencia agitativa— a modo de hacer presente con mayor fuerza su presión a la autoridad. Al fin de cuentas las movilizaciones sociales rupturistas son las que han dado, en su momento, distintas categorías de liderazgo social a Morales, en Bolivia, Lucio Gutiérrez en Ecuador y, en su momento (en el auge de la protesta en contra del fujimorato), a Alejandro Toledo en Perú.

En cuarto lugar, está la retórica nacionalista. Sea desde el gobierno como del populismo radical opositor, la apelación al sentimiento nacionalista es uno de los vehículos emocionales que la conducción populista establece con la población. Hugo Chávez busca legitimarse históricamente como el actualizador de Simón Bolívar. También, y de manera más universal, el populismo siempre busca enemigos externos que son estereotipados como tales ante la masa para presentar su acción confrontacional como una suerte de gesta épica que puede justificar el sacrificio de prácticas democráticas como el pluralismo. Tales enemigos han sido el “antiimperialismo” de manera genérica en el pasado, como lo es hoy la “globalización capitalista”, y de manera más específica, el Fondo Monetario Internacional que es presentado como si fuera uno de los principales responsables de las crisis financieras de la región.

En quinto lugar, está la conducción personalizada. Siempre el populismo tiene a un caudillo como conductor. Este tiene una posición que dista de la de un líder en cuanto no orienta, sino demanda incondicionalidad a sus seguidores respecto de sus objetivos no siempre coherentes. Es el carisma de él, uno de los elementos constitutivos de la conformación de la convocatoria populista, y ello vale tanto para los grupos que están en el poder, como para el populismo que se instala en la oposición. Es más, una de las dificultades que ha tenido el movimiento piquetero argentino, ha sido —precisamente— las rivalidades entre caudillos más que las divergencias de orden táctico, sin por cierto desconocer la existencia de éstas.

En sexto lugar, está la desconfianza en las instituciones, con lo cual estas quedan descolocadas como canales de mediación. El populismo puede ganar adeptos allí donde las instituciones han entrado en la pendiente del desprestigio y por lo mismo tienen diversos grados de deslegitimación dentro de la sociedad. Son los casos, por ejemplo, del Congreso Nacional y de los partidos políticos. El vacío que ello deja es llenado por personas y movimientos de tipo populista que sustituyen los canales institucionales de representación y de mediación política.

En todas sus expresiones, el populismo importa un quiebre con el perfil de la democracia. Su discurso mesiánico y su voluntad antisistémica apuntan a cambiar una etapa del quehacer político. Expresará siempre, por tanto, un consenso de término, pero en no pocas ocasiones no sabrá articular un proyecto fundacional de recambio.

2. En torno al Populismo Radical

El populismo radical es un comportamiento confrontacional de movimientos que se oponen al sistema institucional e instrumentalizan para ello la problemática social existente en un país en una coyuntura determinada.

En tal sentido este concepto incluye a las protestas o movilizaciones sociales contestatarias que expresan claramente una forma de populismo en una doble vía: en cuanto rechazo —inclusive violento— de medidas económicas de ajuste o de implementación de una estrategia de desarrollo aperturista; y en cuanto proyecto de sociedad subyacente en las movilizaciones y que apuntan a configurar una economía de fuerte intervencionismo estatal para restablecer relaciones sociales prebendarias.

Las movilizaciones que promueve el populismo radical expresan una voluntad, y ciertamente una potencial capacidad, de desafío y alteración del orden institucional, tanto en lo político como en lo económico (donde se generan pérdidas tanto al Estado como a los privados), en función de efectuar una presión a favor de sus demandas o para radicalizar expresiones de descontento acerca de la conducción general o sectorial de un país o de, en especial, determinadas políticas económicas. Estas movilizaciones tienen explícita o implícitamente contenido antisistémico y emergen, por lo general, desde sectores que no se sienten interpretados por los actores políticos y sociales no tradicionales.

Las formas que toman estas movilizaciones rupturistas han ido variando en el curso de la última década. Desde las huelgas y marchas no violentas de comienzos de los años noventa, hasta los disturbios callejeros, cortes de rutas, saqueos urbanos y hostigamiento violento a las fuerzas policiales, que

son expresiones de los últimos años. Es claro que la magnitud e intensidad de las movilizaciones dirá relación directa con los alcances, en extensión y profundidad, de la crisis que se viva.

En este sentido serán las crisis económicas las que mayormente impulsarán este tipo de protesta y alimentarán el populismo radical. La base de este es la existencia de un extendido descontento social en la población, donde el factor económico tiene una notoria preponderancia sobre los elementos causales de tipo netamente político. En efecto, hay problemas de orden político como manifestaciones autoritarias de gobiernos formalmente democráticos (Fujimori), o señales de corrupción (Menem), que no desencadenan una crisis generalizada por sí solos y que cobran fuerza cuando se incorporan a un escenario en que la gente percibe directamente angustias económicas (desocupación, inflación, recesión, etc).

Los ejemplos que pueden mencionarse de este tipo de populismo contestatario son varios.

Las protestas de las organizaciones indígenas en Ecuador, las acciones de los piqueteros en Argentina, las movilizaciones de los cocaleros en Bolivia, las movilizaciones estudiantiles radicalizadas en Perú, donde también se están incorporando de manera cada vez más visible los gremios cocaleros. Entre los elementos comunes que tienen las movilizaciones está el rechazo a políticas y medidas económicas, lo que en un primer momento se concentra en un aspecto puntual: rechazo a la dolarización, a las políticas de ajuste, al desempleo derivado de ellas; y en algunos casos también se incluye la protesta en contra de situaciones de corrupción.

En lo global el cuestionamiento es hacia políticas económicas que, en distintas magnitudes e intensidades, prioricen el mercado sobre la excesiva regulación estatal. En este punto las movilizaciones adquieren el carácter de ser "anti-neoliberales", siendo la primera de ellas el denominado "caracazo" de febrero de 1989, contra las reformas económicas de Carlos Andrés Pérez, que prontamente se diluirían.

En algunos escenarios como el boliviano se produce una convergencia de propuestas radicales y a la vez populista. De un lado el discurso indigenista de Felipe Quispe y la Central Única de Trabajadores Campesinos, que plantea la convocatoria "los indios al poder", a partir de la afirmación "Somos el 93%: nosotros, indios, somos la mayoría", donde las reivindicaciones se plantean de manera absolutamente confrontacional hacia el gobierno; y de otro, Evo Morales y el Movimiento al Socialismo, cuya base social es la Coordinadora de Productores de Coca, demanda no sólo el fin de las políticas restrictivas hacia la siembra de ese cultivo, sino que esgrime una postura "antiimperialista". El punto de encuentro es su común rechazo a las

“políticas neoliberales”. En el caso del MAS, queda muy en claro el populismo subyacente dado que sus posiciones deberían concretarse en medidas si llegase a ser gobierno, para lo cual tiene un buen perfil electoral de acuerdo a las elecciones presidenciales del 2002.

La instrumentalización de la problemática indígena –donde hay fallas reales como la pobreza y la exclusión social– por el populismo radical constituye un serio factor de amenaza a la gobernabilidad en lo político y a la aspiración de sustentar en el tiempo una estrategia de desarrollo de libre mercado. Ello, en cuanto donde la población indígena es importante, la convocatoria a la movilización puede llegar a ser extensa al punto de materializarse en protestas de tal envergadura que paralicen las instituciones claves del andamiaje republicano. Si en la caída de Sánchez de Lozada en octubre de 2003 se vio algo de esto, donde el protagonismo indígena es relevante es en el derrocamiento de Yamil Mahuad, de Ecuador, en febrero de 2000.

En otras experiencias el populismo radical tiene perfiles diferentes. Así, en el caso argentino se sustenta en la acción contestataria de los piqueteros, donde –nuevamente– a partir de demandas específicas vinculadas a un problema real como es el desempleo se termina por plantear un discurso anti-mercado y se opta por recurrir a métodos extrainstitucionales de protesta que van desde el bloqueo de carreteras y calles, llegando incluso al copamiento de recintos policiales (tal cual la guerrilla urbana copaba recintos militares en décadas pasadas). En el caso brasileño, el populismo implícito del Movimiento de los Sin Tierra parte desde la demanda redistributiva de la propiedad rural para terminar cuestionando el genérico “modelo neoliberal”.

El populismo radical, que emana desde los grupos contestatarios de base, en definitiva se inscribe en un esfuerzo de más alcance por oponerse a la vigencia de la economía de mercado y a la consiguiente consolidación institucional. Es uno de los instrumentos que busca operacionalizar –allí donde le es posible– un consenso de término respecto de dicha estrategia de desarrollo.

3. La caída del Presidente Gutiérrez en Ecuador

En abril de 2005, tras varios días de movilizaciones sociales violentas, el Congreso Nacional destituyó al presidente de la República, Lucio Gutiérrez, y tomó juramento de estilo a quien fuera el vicepresidente, Alfredo Palacio: desde un punto de vista formal, la estabilidad institucional se ha mantenido, pues al generarse la vacancia presidencial accede al cargo la persona a quien constitucionalmente le correspondía.

Un libreto bastante conocido en América del Sur en los últimos años. Uno similar había funcionado en la renuncia del presidente Sánchez de Lozada en Bolivia y, con algunas variantes, pues al sucesor lo designó el Congreso Nacional, a falta de vicepresidente, en el caso de la renuncia de Fernando de la Rúa, en Argentina.

En todos estos escenarios lo que efectivamente había ocurrido era un colapso institucional, un desbordamiento absoluto de los mecanismos de resolución de conflictos, un sobrepasamiento del rol de las instituciones por la rebeldía violenta de masas movilizadas con un claro propósito rupturista y no necesariamente fundacional.

Ciertamente este cuadro de convulsión no se da repentinamente sino que es la agudización de un proceso de crisis de gobernabilidad. En el caso de la destitución de Gutiérrez, a diferencia de los otros nombrados, el detonante de la crisis no fue el factor económico, si bien dicha variable es uno de los ejes explicativos de una década de persistente inestabilidad de ese país.

El factor detonante fue el autoritarismo presidencial que sobrepasó los límites de una precaria legalidad: el conflicto por el nombramiento y la destitución de la Corte Suprema de Justicia. En diciembre pasado, tras haber sido fuertemente derrotado electoralmente en las elecciones locales, Gutiérrez intentó recomponer su base de apoyo político y se aproximó a algunos partidos de izquierda que lo habían respaldado inicialmente, pero que dejaron de hacerlo cuando él optó por políticas económicas consensuadas con el FMI. En esa recomposición se agrega el partido roldosista –del ex presidente Bucaram– y se pacta el cambio de la Corte Suprema, hasta entonces identificada políticamente con la oposición.

La nueva mayoría parlamentaria destituye a los miembros de la Corte sin tener facultades constitucionales para hacerlo. El gobierno, que estaba detrás de la maniobra, comienza a recibir las imputaciones de querer controlar la suma del poder y la oposición esgrime el argumento de la ilegalidad. Tras meses de tensiones y de una escalada de protestas, Gutiérrez quiere resolver la crisis volviendo sobre sus pasos y destituye por sí y ante sí a la nueva Corte Suprema, que le era políticamente favorable. Nuevamente se tomó una medida para la cual se carecía de atribuciones constitucionales. La percepción de que el presidente, un ex militar golpista, violaba la legalidad quedaba reiterada, pues un acto ilícito no puede anularse por otro acto ilícito.

Lo que colapsa es el Estado de Derecho y la vigencia de las instituciones. La destitución de Gutiérrez al declarar el Congreso Nacional vacante el cargo sin someterlo a juicio político no es sino la culminación de un profundo proceso de descomposición institucional que sigue su curso.

Las movilizaciones sociales rupturistas, por su parte, si bien toman el conflicto con el Poder Judicial como uno de sus argumentos, lo que expresan es su rechazo a una endémica corrupción. No es casualidad que las protestas se tornen más violentas e incontrolables cuando la Corte, puesta en tela de juicio, anula repentinamente los juicios por corrupción que afectan a los ex presidentes Bucaram y Novoa y al ex vicepresidente Dahik, permitiéndoles regresar al país, dejando atrás su calidad de prófugos, y cuando se constató que ese tribunal era presidido por un amigo y partidario de Bucaram.

La corrupción ha sido consustancial a la forma de hacer política en Ecuador a través del nepotismo, el enriquecimiento ilícito y el tráfico de influencias. En la última década hubo cuatro gobernantes que fueron sacados de su cargo: Bucaram, la vicepresidente Rosalía Arteaga, Yamil Mahuad y ahora Gutiérrez; un gobernante que tras terminar su interinato pasó a la cárcel por corrupto: Fabián Alarcón; y otros dos: Bucaram y Novoa que debieron huir para no correr igual suerte.

Qué de extraño es, entonces, que la gente en las calles, como en la Argentina de fines de 2002, pida “que se vayan todos” aludiendo a la clase política. Es que ya no cree en los rituales y los discursos moralizantes, como el pronunciado por el nuevo presidente Palacio, que dicen que terminarán con las irregularidades, en un país que ha sido paradigmático en lo clientelar y prebendario.

Tras la destitución del presidente Gutiérrez que había sido elegido como expresión del populismo revolucionario y que durante su mandato había mostrado una permanente volatilidad en sus orientaciones de gobierno, aquel populismo retornó de manera impetuosa dentro de un precario marco institucional.

La precariedad institucional se evidencia en que hay un gobierno que se declara prescindente de los partidos políticos, fuertemente desprestigiados, pero que no es capaz de configurar una base de sustentación parlamentaria a través de la cual poder impulsar sus proyectos de ley; en que el Poder Legislativo es cuestionado por la población acusándolo de ser un escenario permanente de corrupción y al cual el nuevo presidente Palacio ha llamado a “autodepurarse”; en que hay un Poder Judicial sin Corte Suprema que produce una parálisis en el funcionamiento de esta función esencial del Estado: administrar justicia. El discurso del nuevo presidente no contribuye, precisamente, a clarificar la situación sino más bien la complejiza: habla de convocar a una Asamblea Constituyente, de la mencionada auto depuración sin precisar en qué consiste, de gobernar “con el pueblo”, sin decir cómo y pasando por alto que tras esa vaga denominación hay una sociedad heterogénea y fragmentada.

Palacio vive los primeros días de su gestión desaprovechando el consenso tácito existente en la población y en los actores políticos acerca del término del gobierno de Gutiérrez, sin alcanzar a divisar que dicho clima se romperá en la medida en que su administración plantee políticas de gestión. Y en este sentido las primeras señales que se han dado son inquietantes: el retorno al populismo revolucionario con lo cual se granjeará un amplio abanico opositor.

El populismo comenzó a perfilarse en el área económica. El ministro de Economía, Rafael Correa, señaló que en vez de operacionalizar la bonanza petrolera para lograr equilibrios macroeconómicos, se eliminaba el Fondo de Estabilización, Inversión Social y Productiva y de Reducción del Endeudamiento Público, y esos recursos se trasladan al gasto corriente. Se advierte, por lo mismo, que se entrará en una dinámica de gasto que romperá cualquier equilibrio, incrementará el déficit fiscal y se convertirá en una seria fuente de conflicto cuando el precio del petróleo ya no pueda seguir alimentando el mayor gasto.

Esta determinación populista ciertamente va acompañada por el lenguaje nacionalista. Para el ministro es algo secundario “la opinión de Wall Street”, y está dispuesto a suspender el servicio de la deuda externa, no porque carezca de recursos, sino porque se quiere renegociar tomando como inspiración “el modelo argentino” de Kirchner. El gobierno muestra, además, su despreocupación absoluta por avanzar en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos al desarmar parcialmente el equipo negociador y señalar que primarán los criterios políticos por sobre los técnicos a la hora —cada vez más lejana— de llegar a un consenso, pues el acuerdo debería someterse a una consulta popular. Este nacionalismo se proyecta hacia la política exterior, donde se hacen notables esfuerzos por distanciarse de Estados Unidos y aparecer alineados con el venezolano Chávez, por ejemplo, al demandar la revisión del convenio que permite al país del norte el uso de la Base de Manta para el control del narcotráfico en la región.

En este contexto, no es de extrañar que el riesgo país de Ecuador suba aceleradamente y aún más tras los anuncios económicos. El perfil que está asumiendo la política económica probablemente se traduzca en que organismos financieros internacionales suspendan los desembolsos presupuestados para este año y comience la antesala de una crisis económica que acarreará nuevas convulsiones.

En Ecuador no sólo se ha agudizado una crisis sino que se ha generado un ambiente de tal incertidumbre institucional y un clima de negocios tan negativo que los proyectos de inversión han quedado en suspenso, cuando no cancelados, y eso inevitablemente dañará el funcionamiento de la econo-

mía. Y, entonces, los que gobernaron hasta hace algunos días (Gutiérrez) y los que lo hacen hoy serán perfilados como responsables de la ineptitud de no saber manejar un crecimiento del 6,9% en el 2004, determinado por el petróleo, generando en cambio mayores conflictos, más pobreza y más corrupción.

Al igual que en otras experiencias, Ecuador construye su vía populista a la miseria. Por cierto que invocando al pueblo.

4. LA CAÍDA DEL PRESIDENTE MESA EN BOLIVIA

En junio de 2005, Bolivia vivió la agudización de una prolongada crisis de gobernabilidad en la cual se mantuvo el gobierno de Carlos Mesa, desde que asumió en octubre de 2003 tras la caída del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, provocada también por movilizaciones sociales rupturistas.

Los conflictos que debió enfrentar su gobierno expresaron una acumulación de tensiones de diversa procedencia. De una parte, los movimientos sociales de El Alto, los sectores del indigenismo radicalizado y el Movimiento al Socialismo de Evo Morales, de notable arrastre electoral, demandaban la convocatoria a una Asamblea Constituyente y una nueva legislación sobre hidrocarburos aun más radical que la recientemente aprobada. De otra parte, los movimientos cívicos de Santa Cruz y Tarija reclamaban la celebración de un referendo donde su población se pronunciara sobre la autonomía de las regiones, con el propósito de administrar los recursos que esa zona genera. Las demandas de unos y de otros eran respaldadas por extendidas movilizaciones sociales.

Además, en medio de las movilizaciones se dio una inquietante señal proveniente del ámbito militar. Dos voceros uniformados, tenientes coroneles, anunciaron la aparición del "Movimiento Militar Generación" que exige la renuncia del presidente Mesa, el cierre del Congreso Nacional, convocatoria inmediata a la Asamblea Constituyente, formación de un Pacto Cívico Militar de inspiración nacionalista y socialista, nacionalización de los hidrocarburos y el rechazo a la demanda de autonomía "reclamada por las oligarquías de Tarija y Santa Cruz". El perfil de este movimiento lo aproxima a los actores del populismo radical y, por más que fue explícitamente desautorizado por el mando militar, evidencia una clara fractura de tipo político al interior de las Fuerzas Armadas. El gobierno quedó colocado, una vez más, como un actor contestatario a una realidad que le cuesta controlar.

En este contexto hay que resaltar la permanente indefinición presidencial. En ocasiones anteriores, Mesa recurría a su histrionismo para ganar tiempo o resolver puntualmente algunos conflictos. Ahí está su renuncia al cargo

enviada al Congreso buscando una ratificación que finalmente obtuvo, ahí está también la actualización e instrumentalización de la demanda marítima. Estos recursos, sin embargo, fueron agotando sus efectos. La mejor evidencia de ello es que su propósito de vetar genéricamente la Ley de Hidrocarburos por considerarla contraria a los intereses del país (pese a que fue el mismo gobierno el que convocó a un referendo sobre el tema y elaboró el proyecto de ley original) encontró resistencia en el Parlamento y su esfuerzo por convocar a un diálogo nacional no encontró acogida alguna.

Bolivia se vio envuelta en la trampa del populismo radical y sumida en escenarios de conflictos entrecruzados donde no se divisan horizontes de salida, sino más bien de agudización de la polarización existente. Es una trampa, en cuanto fueron los propios gobernantes quienes construyeron la crisis en que se encuentran. Fue la retórica de Mesa, luego de suceder a Sánchez de Lozada, la que genera la deslegitimación política de la normativa vigente sobre hidrocarburos que antecede a la convocatoria al referendo. En dicha consulta, elaborada por el gobierno, las preguntas eran de tal ambigüedad que podían tener interpretaciones contrapuestas como efectivamente terminó aconteciendo. Fue la misma retórica la que plantea la necesidad de derogar la Constitución y sustituirla por otra elaborada por una Asamblea Constituyente, a la cual hasta ahora no convoca.

En su primer año, Mesa gozó de una relativa estabilidad gracias a un tácito pacto de gobernabilidad con el Movimiento al Socialismo de Evo Morales. Eso le llevó a aceptar gran parte de los requerimientos de este actor. Este entendimiento se quiebra en la discusión parlamentaria de la Ley de Hidrocarburos y Mesa busca asilarse entonces en el apoyo de los partidos tradicionales (pacto de gobernabilidad de marzo de 2005), los mismos que habían respaldado a Sánchez de Lozada. Sin embargo, la falta de representatividad de los partidos lo dejó expuesto a las presiones sociales. Pronto se veía que el clima de ingobernabilidad se tornaba inmanejable.

En junio de 2005 el gobernante quiso detener las protestas sociales firmando un decreto por el cual se convocaba tanto a elecciones de Asamblea Constituyente como al referendo autonómico, es decir, accediendo a las demandas. No fue suficiente, pues los mismos que estaban tras esas demandas indicaron que esa convocatoria no tenía valor si no era ratificada por el Congreso Nacional y optaron por seguir presionando en las calles buscando el pronunciamiento parlamentario.

De otra parte, la Iglesia Católica, a pedido del gobierno, asumió el rol de fuerza mediadora procurando aproximar a las partes a una instancia de diálogo que detuviera o al menos congelara una crisis que cada vez más

tenía los rasgos de ser terminal. Los partidos tradicionales aceptaron la oferta mediadora, pero no así los movimientos sociales de El Alto y La Paz, para quienes la Iglesia era una entidad que “había estado comprometida con el poder económico”. Con esta negativa se diluyó la posibilidad de negociación entre las partes y la crisis se hizo más severa.

En este punto, el presidente Mesa renuncia definitivamente al cargo. Lo normal hubiese sido que su decisión implicase el fin o al menos una disminución sustantiva de las movilizaciones, pues éstas habían logrado el término del gobierno, como ya había ocurrido en octubre de 2003 con la renuncia de Sánchez de Lozada, pero ello estuvo lejos de lograrse. Con Mesa renunciado el clima agitativo siguió tal cual estaba y sus efectos sobre la población (aislamiento de ciudades, desabastecimiento, inseguridad por la violencia callejera) se hicieron más graves. Ahora la movilización era para impedir que se siguiera el orden sucesorio y asumiera la presidencia el senador Hormando Vaca Díez, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, perteneciente al bloque de partidos tradicionales hoy carentes de representatividad.

La crisis se agravó aún más. Desde el indigenismo radicalizado se planteó la alternativa de una guerra civil. Las Fuerzas Armadas, aunque reiteraron su respeto al orden constitucional, se declararon en estado de alerta. Como respuesta se fue articulando un consenso tácito —que incluía tanto a Mesa como a Evo Morales— para presionar a Vaca Díez a renunciar a sus derechos sucesorios y nominar como gobernante al presidente de la Corte Suprema, Eduardo Rodríguez, con la misión de llamar a elecciones presidenciales y de Congreso Nacional a fines del presente año.

Al asumir Rodríguez con tal mandato, la presión social bajó. Contribuyó a ello el que el MAS reforzara su apuesta a llegar al poder por la vía electoral. Sin embargo, muchos de los factores rupturistas persisten: la demanda de una nueva Constitución y la nacionalización efectiva de los hidrocarburos. Todo ello teniendo como telón de fondo la pretensión del indigenismo radical de “refundar la nación” para incorporar a los indígenas “en la conducción del país”.

En otras palabras, la administración interina del juez Rodríguez no es hito hacia la recuperación de la normalidad institucional, sino tan solo una suspensión de un clima de ingobernabilidad que aún puede agudizarse.

5. FRAGILIDAD DEMOCRÁTICA EN AMÉRICA LATINA

En los últimos años diversos regímenes democráticos se han visto seriamente afectados en su gobernabilidad por la explosión de estallidos sociales

que terminan desbordando los cauces institucionales y precipitando cambios bruscos de gobierno, los que, por darse dentro de la liturgia constitucional no son considerados, hasta ahora, como atentatorios a la estabilidad democrática. Los casos mencionados en este artículo responden a ese padrón. Al fin de cuentas, al presidente caído lo reemplaza un sucesor previsto en la Constitución

Tras el funcionamiento formal de los mecanismos sucesorios se esconde la fragilidad de las democracias que, en el fondo, son extorsionadas por las movilizaciones rupturistas. Una peligrosa señal de esta precariedad la constituye el hecho de que actores políticos o entidades internacionales que pueden detectar el riesgo no intervienen en su defensa, argumentando que no hay un atentado en contra del sistema, o bien reaccionan negativamente si la autoridad afectada por la subversión social recurre a la represión, cuestión legítima en todo ordenamiento social si ella descansa en la ley; apoyando de esta manera oblicua a los grupos violentos.

Lo que termina por ocurrir es una parálisis institucional; esto significa que las instituciones llamadas a dirimir y resolver los conflictos involucrados en las movilizaciones violentas pierden efectividad o simplemente son desbordadas por grupos que plantean sus demandas al margen de los cauces legales y que expresan sus propósitos confrontacionales a través de tomas de calles, cortes de rutas, saqueos del comercio y de las instalaciones públicas, ataques a cuarteles policiales, etc.

Frente al funcionamiento de las instituciones democráticas en estos casos lo que termina prevaleciendo son escenarios de violencia agitativa. Se trata de una violencia de tipo callejero y que no se estructura como expresión armada o insurreccional, pero es lo que otorga intensidad a las movilizaciones rupturistas y a su confrontación con el sistema, siendo el instrumento a través del cual la subversión social provoca los escenarios de ingobernabilidad. En estas manifestaciones hay componentes que son espontáneos, como en cierta forma lo es la incorporación del lumpen, pero no cabe duda alguna que detrás de ellas hay actores ideológicos que las conducen a situaciones cada vez más polarizadas.

Los estallidos sociales se presentan en escenarios en que la estructura institucional es débil. La primera señal de que ellos vendrán se produce cuando en el país surgen climas de descontento social, las más de las veces originados en crisis económicas que agudizan el desempleo y las carencias sociales. Además, los actores políticos tradicionales van perdiendo progresivamente legitimidad como interlocutores. Es aquí donde surgen los actores del populismo radical que instrumentalizan aquella problemática para cuestionar tanto el manejo de la economía como la conducción del sistema

institucional. En la medida en que el descontento crece y se alimentan movilizaciones cada vez más confrontacionales, principios que son elementales en una democracia, como la vigencia del Estado de Derecho, la estabilidad del orden público económico y el ejercicio pacífico y competitivo de la actividad política, pasan a ser relativizados. La democracia efectiva va perdiendo sentido.

Se hace necesario entonces adoptar medidas para resguardar a la democracia de la amenaza que importa el populismo radical. En la valoración de la vigencia de un régimen democrático hay que ir más allá del procesalismo electoral para testear también la observancia por la autoridad de la vigencia del Estado de Derecho y el respeto a la libertad personal. De lo que se trata es de evitar que, con el ropaje de una pseudo democracia plebiscitaria, se oculten prácticas totalitarias que además pueden ser un factor de inestabilidad institucional a nivel regional.

BIBLIOGRAFÍA

Benavente, Andrés y Cirino, Julio: "La Democracia Defraudada. Populismo Revolucionario en América Latina", Buenos Aires, editorial Grito Sagrado, 2005.

Benavente, Andrés: "Los nuevos ejes insurreccionales en América Latina después de Chiapas", Santiago, Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Chile, 1998.

Burbano, Felipe: "El fantasma del populismo", Caracas, Nueva Sociedad, 1998.

Laclau, Ernesto: "La razón populista", Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2005.

López, Margarita: "Lucha popular, democracia y neoliberalismo", Caracas, Nueva Sociedad 1999.